



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Expte nº: 46238 / 2023 - AML

Autos: “AWA DISTRIBUIDORA S.A. c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva del Expte Nro. 46238/2023

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

I.- Llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la RESOL 2023-18266-APN -DRLF#MT, dictada por la Dirección Nacional de Fiscalización del MTESS, por la que se desestima el recurso de impugnación administrativa interpuesto contra el acto administrativo dictado en el expediente N° 7-99-1224374-2022.

Oportunamente se le hizo saber a la rubrada, que la resolución en cuestión agotaba la instancia administrativa y que aquella podía ser recurrida por la vía prevista en el art. 10 inc. b) de la Resolución METySS N ° 655/05 y sus modif.).

Al respecto, corresponde advertir que el remedio procesal intentado fue interpuesto sin dar cumplimiento a la carga de orden formal de efectuar el depósito previo del importe de la deuda, actualización e intereses de conformidad con lo dispuesto en la normativa precedentemente citada.

II.- Así las cosas, corresponde analizar en primer término, si corresponde eximir a la recurrente del principio solve et repete. A tal fin, la recurrente ofrece seguro de caución N ° 340.871, emitida por la firma Evolución Seguros, por la suma de Pesos Doscientos Diecinueve Mil Setecientos Noventa y Ocho con Veinte Centavos (\$219.798,20).

Compartiendo lo dictaminado por el Sr. Agente Fiscal en autos “Parflik S.A.C.I.F.I.A”(dictamen de la Fiscalía N° 2, de fecha 22/12/93, n° 4935/93) y lo resuelto por este Tribunal en los mismos autos, mediante sentencia de fecha 14/4/94, N 57859/94 y en autos “Tronchet Pour L Home S.A c/ DGI s/ Impugnación de deuda”, sentencia n 77225 del 12/06/95 , y por la Sala II del fuero en autos “Club Atlético Vélez Sársfield Asociación Civil c/ DGI , sent. 72.655 del 18.12.98 y por la Sala III en autos “Creaciones Ginesse SAIC c/ DGI”, sent. 68.448 del 17.5.98, el depósito previo que exige el art. 15 de la ley 18.820 para la concesión del recurso importa el cumplimiento provisional y adelantado de la condena, constituyendo así una razonable medida precautoria impuesta en salvaguardia del interés colectivo comprometido.



En ese contexto, este tribunal entiende que la fianza acompañada garantiza el pago de las obligaciones reclamadas en las actas en cuestión, por lo que debe eximirse al recurrente de la carga impuesta por las disposiciones citadas, ya que está suficientemente garantizada la obligación.

En sentido análogo se han pronunciado las tres Salas que integran el fuero, entre otras, así como la Sala II en autos “COMPAÑÍA DE SERVICIOS HOTELEROS S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda”, SD. 114.039, la Sala III en autos “TREVES ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda”, SD. 110.602, y esta Sala I en autos “FRIGORÍFICO GORINA S.A.I.C. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda”, SD. 124.944.

Ello así, corresponde tener por cumplido el requisito exigido por el art. 15 de la ley 18.820, mod. por art. 26 de la ley 24.463, y declarar habilitada la instancia judicial.

III.- La apelante se agravia de la resolución recurrida, en tanto considera que no contiene elemento valedero alguno, altera el proceso administrativo lo que conlleva a su nulidad absoluta.

Agrega respecto a la supuesta relación laboral endilgada, dista mucho de la realidad y es absolutamente falsa. Así, considera que en la resolución recurrida no se tuvo en cuenta que los Sres. TORRES WALTER OSVALDO y LEZCANO VICTOR RAMON, no han desarrollado tareas del tipo de las descriptas en el acta, ni en la categoría que pretenden asignarle, ni en la condición ni en el período que mendazmente se consignara, por lo que no existió relación laboral del tenor registrado en el acta de inspección labrada oportunamente, por lo que la considera maliciosa e improcedente.

Afirma que las personas relevadas, revisten la condición de monotributistas, que ejercen su profesión cumpliendo solo determinadas tareas de promoción para DISTRIBUIDORA AWA S.A., cuando son eventualmente convocados a tal efecto.- Ello no implica ningún otro tipo de relación, ni mucho menos exclusividad, en tanto puede realizar las mismas tareas para otra u otras empresas.

IV.- Previo a resolver la cuestión de fondo, corresponde señalar que con relación al planteo que las actas recurridas carecen de los requisitos propios del acto administrativo, es dable destacar que conforme Juan Gilibert, en “ El Derecho a la legítima defensa en el sistema jubilatorio argentino” (L.T, pág. 385/6), las diligencias que se cumplen con la intervención de los funcionarios competentes y se instrumentan a través de las actas de verificación, que se notifican al interpelado, no reúnen los requisitos esenciales ni generales de un acto administrativo y ello por cuanto no ha





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

mediado una decisión fundada que cause estado, pues hasta tanto no se haya agotado el procedimiento regulado por la ley 18.820 y que da lugar a la ejecución, no es un acto administrativo definitivo, contando el obligado con los medios legales apropiados para demostrar la improcedencia del débito intimado.

Es sólo la conformidad del contribuyente, mediante la no impugnación de las actas, lo que permite al fisco proceder a su cobro, y si, por el contrario, se muestra disconforme con la deuda o infracción, la ley 18.820 pone a su alcance el procedimiento recursivo adecuado para fundamentar sus agravios. Sólo después de una decisión fundada, acto administrativo definitivo, contraria a la pretensión del recurrente, se habilitará a la ejecución fiscal, siempre y cuando no medie apelación ante la Excma. Cámara Federal de Seguridad Social, pues entonces deberá esperarse una sentencia favorable de ésta a los intereses fiscales.

Como consecuencia lógica de lo expuesto, cabe concluir que las actas de inspección e infracción no son más que una constatación que hace la Administración de la situación del contribuyente, por lo que no cabe exigir de las mismas los requisitos propios de los actos administrativos, como tampoco que sean realizadas por juez administrativo, ya que por tratarse de constataciones las mismas pueden ser cuestionadas- tanto la deuda como la multa- y dar nacimiento posteriormente al proceso que nos ocupa. Por todo lo expuesto, corresponde la desestimación del agravio esgrimido por el apelante en este sentido.

V.- Las presentes actuaciones tienen su origen en el relevamiento de personal realizado por personal del organismo fiscal, en el establecimiento comercial perteneciente a la apelante.

En oportunidad del relevamiento, fueron encuestados dos personas. Una de ellas, el Sr. Torres, Walter Osvaldo, quien declaró haber ingresado el 3/01/2022, para realizar tareas de reparto, recibiendo una remuneración mensual de \$20.000, de lunes a viernes, durante 6 hs.

También fue relevado el Sr. Lezcano Victor Román, quien expresó haber ingresado el 3/05/2020, efectuando tareas de reparto, de lunes a sábados durante 8 hs.

Sentado ello y preliminarmente, se advierte en autos que, la recurrente no logra desvirtuar los fundamentos con que se dictó la resolución que recurre.



Ello así, además de efectuar exactas consideraciones que en los recursos administrativos, la prueba a la que alude como rechazada por el Fisco, debe resultar relativa a hechos conducentes para la resolución de la causa, sin que este concepto pueda confundirse con la pertinencia, admisibilidad y atendibilidad de la misma.

De este modo, debe existir relación con los hechos sobre los que versa el objeto probatorio. Y además, la prueba, debe resultar lo suficientemente eficaz para crear, en un caso concreto, la convicción del juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos.

De esta manera, toda vez que este tribunal tiene dicho que, comparte el criterio del valor probatorio de las manifestaciones espontáneas y sorpresivas efectuadas por los empleados ante las autoridades administrativas y que se constatan en actas, y la contribuyente sólo cuestiona los criterios utilizados en la resolución recurrida limitándose a repetir argumentos expuestos en los distintos escritos, es que corresponde confirmar lo decidido por el organismo.

A mayor abundamiento, no obsta a tal conclusión, la posterior declaración jurada efectuada por los supuestos empleados ante escribano público, ya que no resulta suficiente para desvirtuar el cargo formulado. Asimismo, cabe asignar a la primigenia declaración testimonial, prevalencia sobre posteriores rectificaciones (cfr. C.F.S.S, Sala III, sent. del 22.04.02, "Molinos Ala S.A."; íd. sent. del 28.02.03, "Recreativo Bochas Club Paraná"), atento a que los presuntos trabajadores pueden estar obligados por el empleador a testificar en un determinado sentido.

Por todo lo expuesto y, toda vez que la parte actora efectúa una mera negativa de la existencia del vínculo laboral, pero no logra desvirtuar los fundamentos con que se dictó la resolución que recurre, corresponde confirmar la resolución recurrida de acuerdo los fundamentos expuestos precedentemente.

VI.- Dado el resultado alcanzado, dada la particularidad de la temática abordada, pudo válidamente generar en la parte actora la creencia de que contaba con un mejor derecho a litigar o, al menos, de lograr esa respuesta en el ámbito judicial. Por esa razón, las costas deben distribuirse en el orden causado (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

La Dra. Viviana Piñeiro no vota en virtud de hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Por ello, este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar formalmente admisible el recurso; 2) Confirmar la resolución recurrida de acuerdo a las fundamentaciones expuestas precedentemente. 3) Costas por su orden.

Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública –dependiente de la CSJN (conf. Ac. 10/25) y, oportunamente, remítase.

